



El legado del frente nacional: entre la política con violencia, la violencia política y la fragilidad del estado en Colombia.

Alexander Zuluaga Gil

Trabajo de grado de maestría presentado para optar al título de Magíster en Estudios Políticos

Asesora

Carolina María Horta, Doctor (PhD) en Historia

Universidad Pontificia Bolivariana
Escuela de Derecho y Ciencias Políticas
Maestría en Estudios Políticos
Medellín, Antioquia, Colombia
2025

El contenido de este documento no ha sido presentado con anterioridad para optar a un título, ya sea en igual forma o con variaciones, en esta o en cualquiera otra universidad.

Dedicatoria

A Dios

A mis padres

A mis hijos

Al compromiso y apoyo incondicional de mi esposa

A la Comunidad Judía de Medellín.

יִזְכוֹר

Izkor

Tabla de contenido

| | |
|---|----|
| Resumen | 5 |
| Abstract | 6 |
| Introducción | 7 |
| 2. El Frente Nacional, un legado de la violencia bipartidista..... | 24 |
| 3 Entre tinta y disidencia: la prensa como un espacio de oposición al consenso bipartidista del Frente Nacional. | 37 |
| 3.1 La oposición durante el Frente Nacional:..... | 38 |
| 3.1.1. Oposición desde adentro:..... | 38 |
| 3.1.2. Oposición desde afuera | 40 |
| Referencias | 48 |

Tabla 121

Resumen

Este artículo analiza de manera crítica el Frente Nacional en Colombia, por considerarlo resultado histórico de la violencia bipartidista entre liberales y conservadores, entendida ella no solo como un fenómeno armado, sino como una expresión estructural de la disputa por el control del Estado. A través de un enfoque de historia crítica y memoria histórica, se examinan las múltiples facetas de esta violencia política, las condiciones que dieron lugar al pacto del Frente Nacional (1958-1974) y sus implicaciones en la construcción fallida de una democracia inclusiva en Colombia.

En particular, se argumenta que el Frente Nacional no fue una superación de la violencia, sino una forma de su institucionalización a través de un acuerdo excluyente entre élites partidistas. Además, el artículo reconstruye las voces de oposición al pacto desde adentro y fuera de los partidos tradicionales a través del análisis de fuentes de prensa de la época, revelando cómo los medios impresos dieron cuenta de tensiones, resistencias y alternativas políticas marginadas del proyecto frente nacionalista. En conjunto, este trabajo busca contribuir a una comprensión más profunda de la continuidad de la violencia política en Colombia y sus vínculos con los procesos inconclusos de modernización y construcción estatal.

El resumen permite identificar la esencia del escrito, mencionando brevemente el objetivo y la metodología, así como los resultados y las conclusiones (mínimo 150, máximo 250 palabras).

Palabras clave: Memoria histórica, oposición política, violencia bipartidista, Frente Nacional, polarización política, democracia excluyente.

Abstract

This article critically analyses the National Front in Colombia, considering it to be the historical result of bipartisan violence between liberals and conservatives, understood not only as an armed phenomenon, but also as a structural expression of the dispute for control of the state. Through a critical history and historical memory approach, this examination explores the multifaceted nature of this political violence, the conditions that gave rise to the National Front pact (1958-1974), and its implications for the failed construction of an inclusive democracy in Colombia.

It argues that the National Front was not an overcoming of violence, but a form of institutionalization through an exclusionary agreement between party elites. In addition, the article reconstructs the voices of opposition to the pact - from within and outside the traditional parties - through an analysis of press sources from the period, revealing how the print media provided an account of tensions, resistance, and political alternatives marginalized from the Frente Nacionalista project. Overall, this paper aims to contribute to a deeper understanding of the continuity of political violence in Colombia and its connections to the incomplete processes of state-building and modernization.

Keywords: historical memory, political opposition, bipartisan violence, National Front, political polarization, exclusionary democracy.

Introducción

La democracia, como sistema político, se ha considerado uno de los modelos más legítimos y deseables en la sociedad contemporánea, con la promesa de garantizar participación política, igualdad de derechos y la integración de diversos sectores sociales en un solo Estado. Sin embargo, en el contexto colombiano, ha permanecido más como un ideal abstracto que como un motor transformador de la sociedad. Los esfuerzos por instaurar un proyecto democrático efectivo han sido interrumpidos por factores estructurales y coyunturales que, lejos de promover el desarrollo social y político, han mantenido al país en constante tensión.

Durante el siglo XX, Colombia fue marcada por la violencia bipartidista, particularmente entre liberales y conservadores, lo que culminó en la creación del Frente Nacional (1958-1974). Aunque este acuerdo político logró estabilizar temporalmente el país al cesar la violencia sectaria, también consolidó un sistema de alternancia en el poder que limitó la participación democrática y reforzó el dominio de las élites tradicionales. El legado del Frente Nacional es una democracia excluyente, caracterizada por la polarización, la resistencia a la oposición y la violencia política, cuyas secuelas continúan influyendo en la calidad de este sistema en Colombia.

A lo largo de las décadas, las instituciones colombianas han sido incapaces de integrar a todos los sectores sociales en un proyecto democrático inclusivo. La persistente polarización política ha socavado las bases de la convivencia, favoreciendo conflictos armados y desconfianza en las capacidades del Estado. Elementos, que fueron exacerbados por el contexto del Frente Nacional, y que evidenciaron la fragilidad de la democracia colombiana como un proyecto posible y transformador.

Este trabajo analiza cómo las dinámicas de violencia bipartidista, la herencia del Frente Nacional, la polarización, entre otros, han erosionado las posibilidades de una democracia efectiva en Colombia. Se busca responder a una pregunta crucial: ¿por qué, a pesar de las

debilidades históricas, seguir luchando por la democracia en un país donde este sistema ha mostrado tantas limitaciones?

1 Las múltiples facetas de la violencia entre conservadores y liberales como generadora del frente nacional

El conflicto armado en Colombia se remonta a las décadas de 1920 a 1940, son 104 años de distancia dedicados a la confrontación violenta o, dicho de otra manera, ya había pasado mucho tiempo desde la independencia, y aún en pleno siglo XX, no se había podido consolidar la nación.

El enfoque de este artículo no se limita a relatar hechos sobre la violencia en aquellos años, más bien busca cuestionar las interpretaciones tradicionales de la misma, indagando en las causas que la pudieron haber propiciado y los intereses de los involucrados, pues, este periodo, fue el engranaje crucial para que, luego, se dieran los términos de un acuerdo político sin igual en América Latina, llamado Frente Nacional.

Es el político liberal, Hernán Echavarría Olózaga quien describió, qué ocurría por aquel entonces: “En Colombia el alcalde del pueblo, además de ser decisivo en las elecciones, era factor determinante, puesto que controlaba la fuerza pública. Cuando había cambio de régimen los alcaldes tenían como función principal hacer “limpieza política” del lugar. Esto consistía, principalmente, en desterrar al contendor. Los liberales hicieron “limpieza” en la década de los años treinta. Al advenimiento, nuevamente, del régimen conservador, en 1946, estos iniciaron “limpieza” sacando a los liberales. Fue así como muchos campesinos liberales perdieron sus tierras y tuvieron que desterrarse (...)

El Ejército recibía órdenes del Partido Conservador, luego estaba de parte de los hacendados quienes eran en su mayoría conservadores. Fue así como muchos pequeños propietarios liberales ingresaron a las guerrillas comunistas, en busca de protección”. (Comisión de la verdad, 2022).

Esta descripción revela un mecanismo de control y represión política en Colombia durante el siglo XX, centrado en el papel de los alcaldes como figuras clave en la consolidación de intereses bipartidistas. Se destaca que estas prácticas de freno comenzaron en entornos locales, en los hogares, en las áreas rurales, alimentando mal las rivalidades políticas, que, eventualmente, se expandieron a nivel nacional.

El punto de partida es evidente, las autoridades locales actuaron como instrumentos de represión en lugar de ser representantes imparciales de la ley. Los alcaldes, al servicio del partido gobernante, participaron activamente en la violencia política y en prácticas de “limpieza política”, lo que cuestiona la neutralidad del Estado y su capacidad para mediar entre facciones en conflicto.

Estas dinámicas no solo fortalecieron la polarización política, sino que también socavaron el desarrollo de un proyecto democrático, exponiendo a los ciudadanos a persecuciones basadas en sus filiaciones partidistas y perpetuando un sistema de violencia institucional.

La noción de "limpieza política" destaca como un elemento concluyente en la historia del conflicto en Colombia, reflejando la gravedad de la violencia en un periodo marcado por el desplazamiento y el despojo. Este concepto no solo abarca la eliminación física de opositores, sino también el desplazamiento concreto de comunidades afines a partidos rivales, lo que evidencia una estrategia de dominación territorial que favorecía a los hacendados conservadores. El control de la tierra, un recurso esencial en el país se entrelazaba con lealtades políticas, generando injusticias sociales que persisten hasta hoy.

En un contexto así las Fuerzas Armadas tendrían la función de garantizar la estabilidad política y la defensa territorial. Sin embargo, la militarización de conflictos locales, donde el Ejército actuaba bajo las órdenes del Partido Conservador, revela otra parcialidad del Estado que favorecía a un grupo político en detrimento de la mayoría de la población. Esta situación contribuyó al desplazamiento de campesinos liberales hacia movimientos guerrilleros de

tendencia comunista, no por afinidad ideológica, sino por la necesidad de supervivencia y protección. Con el tiempo, esta dinámica de represión bipartidista fomentó el surgimiento de la resistencia armada y el fortalecimiento de grupos insurgentes en Colombia.

Así quedó registrado en el periódico El Diario del 7 de febrero de 1963 en un artículo que tituló: “Testimonio de un guerrillero ¿cómo encontró Monseñor Guzmán a “chispas”? “su nombre de pila es Teófilo Rojas y voy a contarles la manera como tuvo que vivir siendo todavía muchacho por el año 49 o 50, vivía al lado de sus padres en una finca en la región de Rovira (Tolima)”. Donde trabajaban tranquilos hasta que llegaron los conservadores como si eso fuera de ellos.

Por eso decidió irse de cerca de esas gentes tan malas, como lo expresó él, a ver si así evitaba morir en sus manos, huyó a un lado de los Andes, donde estaba Leónidas Borja, quien también había tenido que huir por la violencia. Siendo que por ese entonces pasan del trabajo y la paz, a la violencia y la persecución “por el único pecado de ser liberales” – dijo chispas-. (El Diario, 1963, pág. 3)

Eduardo Pizarro Leongómez, contribuye a esclarecer la simbiosis campesino – liberal - comunismo, aunque no ahondaremos en eso, en un ensayo titulado “los orígenes del movimiento armado comunista en Colombia”, lo hace así: “Las zonas en donde emergerá la resistencia comunista contra la violencia oficial a fines de la década de los años cuarenta, poseían ya una larga tradición de lucha y organización.

Durante los años veinte y treinta se presentaron tres tipos de conflictos agrarios, como explicará Pierre Gilhodés: (Gilhodés, 1988). “los relativos a las condiciones de trabajo en las haciendas, sin que se tocara, al menos inicialmente, la cuestión de la propiedad de la tierra; los conflictos relacionados con la propiedad de la tierra, mediante el cuestionamiento de los títulos de propiedad; y finalmente, las disputas relacionadas con la problemática de las comunidades indígenas (por ejemplo, la recuperación o la defensa de las tierras de los resguardos)” (Pizarro Gómez, 1989, págs. 7-8).

En Hobsbawm lo encontramos expresado así: “Bandoleros y salteadores de caminos preocupan a la policía, pero también debieran preocupar al historiador. Porque en cierto sentido, el bandolerismo es una forma más bien primitiva de protesta social organizada, acaso la más primitiva que conocemos. En cualquier caso, en no pocas sociedades, lo ven así los pobres, que por lo mismo protegen al bandolero, le consideran su defensor, le idealizan, y le convierten en un mito: Robín de los Bosques en Inglaterra, Janosik en Polonia y Eslovaquia, Diego Corrientes en Andalucía, que probablemente son todos ellos personajes que existieron y que han sufrido esta transfiguración”. (Hobsbawn, 1983, pág. 27)

...Y continúa Pizarro: “Estas diversas reivindicaciones llevaron a numerosos núcleos campesinos e indígenas a defender sus intereses mediante la creación de ligas y sindicatos, en los cuales no faltaría la decisiva influencia del pensamiento socialista o del agrarismo revolucionario, gracias a la actividad desplegada inicialmente por el Partido Socialista Revolucionario, por el Partido Agrario Nacional, por la Unión Nacional de Izquierda Revolucionaria (UNIR), de Jorge Eliécer Gaitán, y posteriormente por el Partido Comunista.

Un rasgo persistente en el desarrollo de las luchas agrarias en el país, desde las primeras décadas de este siglo, ha sido la combinación simultánea de formas de acción legal e ilegal, no necesariamente armada. Esta mezcla se encuentra en la raíz misma de la acción del Partido Comunista en las zonas rurales en las cuales se articuló desde los años treinta”. (Pizarro Gómez, 1989, pág. 8).

Otro caso de especial interés que puede identificarse como un causante del conflicto armado en los años previos al Frente Nacional es el del movimiento campesino, abordado en el anterior fragmento, en el que se ilustran las raíces de la resistencia indígena, liberal y, por supuesto, campesina, en Colombia. Destacando que estas se fundamentan en décadas de conflicto agrario. Se reconocen tres tipos de conflictos desde los años veinte, lo que sugiere que las tensiones sobre la tierra y las condiciones laborales son problemas profundamente arraigados y no meramente circunstanciales.

Es histórico que la tierra en Colombia ha estado concentrada en manos de una élite que ha establecido las reglas económicas y sociales en las zonas rurales. Al cuestionar los títulos de propiedad, los campesinos no solo buscaban acceso a los medios de producción, sino que también desafiaban un sistema agrario excluyente y elitista, lo que contradice la narrativa oficial que considera la resistencia como un acto de subversión comunista.

No es posible desestimar la influencia de diversas organizaciones políticas, como el Partido Socialista Revolucionario o el Partido Comunista, que introdujeron ideologías socialistas y agraristas en las comunidades rurales, avivando la formación de ligas y sindicatos que no solo defendían intereses económicos, sino que también fomentaban una identidad política en oposición a la hegemonía bipartidista, evidenciando que los movimientos campesinos e indígenas fueron agentes activos en la configuración de sus demandas. Esto resalta que la resistencia organizada iba más allá de una simple reacción a la violencia, representando una búsqueda de un proyecto alternativo de sociedad y democracia desde el campo.

Finalmente, se destaca la coexistencia de tácticas legales e ilegales en las luchas agrarias. Dado que el sistema judicial y el aparato estatal a menudo respondían a los intereses de la élite terrateniente, los campesinos e indígenas se vieron obligados a emplear diversos métodos para proteger sus derechos. Esta situación revela una paradoja en la narrativa de legitimidad del Estado: las comunidades recurrían a la legalidad cuando ofrecía protección, pero cuando esta resultaba insuficiente o contraria a sus intereses, optaban por métodos alternativos. Este uso simultáneo de acciones legales e ilegales pone de manifiesto la falta de legitimidad del sistema jurídico en contextos rurales y su incapacidad para garantizar derechos básicos.

Un fragmento que podría sintetizar esto podría ser: “La autodefensa campesina y los núcleos guerrilleros se constituirán en la modalidad central de la actividad del Partido Comunista durante la Violencia, en especial, debido a la desarticulación del movimiento obrero y a la legalización de hecho del comunismo.

En ese momento, el campesinado se mostraba como una fuerza revolucionaria más activa que la clase obrera. A partir de la experiencia militar que adquirirá el Partido Comunista en los años de la Violencia, ya nunca más se desmovilizarán del todo las guerrillas que inspira; ya la lucha armada quedará inscrita en su sino histórico, en el corazón mismo de su estrategia política para alcanzar el poder”. (Pizarro Gómez, 1989, pág. 10)

Es en la obra “La violencia en “Colombia” donde Orlando Fals Borda, Monseñor Germán Guzmán Campos y Eduardo Umaña Luna abordan el fenómeno de la violencia como una manifestación estructural de las tensiones sociales, políticas y económicas acumuladas en el país. Los autores sostienen que una comprensión adecuada de este fenómeno requiere un enfoque histórico, que considere tanto los antecedentes inmediatos como los de larga duración, especialmente en lo que respecta al papel desempeñado por los partidos políticos tradicionales y otras instituciones del orden sociopolítico colombiano.

El estudio identifica tres hitos temporales fundamentales para el análisis de la violencia: el año 1930, que señala el inicio de un periodo de agudización del conflicto político-social; el 7 de agosto de 1946, fecha que coincide con un cambio en el poder ejecutivo; y el 9 de abril de 1948, día del asesinato de Jorge Eliécer Gaitán, evento que catalizó una intensificación de la violencia bipartidista. En particular, 1930 es caracterizado como el comienzo de una etapa marcada por hechos violentos de gran magnitud, localizados principalmente en regiones como los Santanderes, Boyacá, Cundinamarca, Antioquia y Caldas.

En 1930, llamada por estos autores “etapa conflictiva”, nos introducen expresando: “Los cruentos acontecimientos del año 30 se circunscriben geográficamente a la zona de los Santanderes, Boyacá, Cundinamarca, Antioquia y Caldas. El conflicto surge con el pretexto del cambio de gobierno o quizá como último gesto de nuestro quijotismo pendenciero de los Mil Días”. (Fals y otros, 1962, pág. 24).

Este enfoque regional permite afirmar que la violencia no constituyó un fenómeno homogéneo ni aislado, sino que estuvo condicionada por patrones históricos, sociales y

económicos particulares en cada territorio. Según los autores, estas regiones, a pesar de su relevancia económica y política, compartían características estructurales que favorecían la conflictividad: una fuerte concentración de la propiedad de la tierra, la persistencia de relaciones sociales de carácter clientelista y patrimonialista, y una profunda desigualdad socioeconómica.

La violencia puede ser entendida, aunque no de forma taxativa, como resultado de una configuración estructural de largo aliento, en la que convergen factores materiales y simbólicos. Esta interpretación permite superar las explicaciones reduccionistas y episódicas del conflicto, proponiendo en su lugar una lectura crítica de las dinámicas de poder enraizadas en el sistema político y económico colombiano de la primera mitad del siglo XX.

La identificación de regiones específicas, los Santanderes, Boyacá, Cundinamarca, Antioquia y Caldas como escenarios principales de los “cruentos acontecimientos del año 1930” no resulta fortuita. Por el contrario, revela la existencia de patrones regionales en la configuración de la violencia política en Colombia, lo cual permite afirmar que dicho fenómeno no fue aislado ni homogéneo, sino que respondió a dinámicas históricas, sociales y territoriales diferenciadas.

El planteamiento sugiere que las expresiones de violencia estuvieron estrechamente vinculadas a las particularidades socioeconómicas y políticas de cada región. Los departamentos mencionados compartían ciertas condiciones estructurales que contribuyeron a su alta conflictividad: una marcada concentración de la tierra, que generaba tensiones agrarias persistentes; un rol protagónico en la economía y en la política nacional; y, paradójicamente, elevados niveles de desigualdad social. Asimismo, su carácter agrícola y comercial los convertía en espacios estratégicos de disputa por el poder, lo cual los hacía especialmente susceptibles a episodios de violencia.

Que este fenómeno estuviera enfocado en estas zonas apunta a que los conflictos estaban estrechamente ligados a la lucha por el control territorial y los recursos económicos. Es por esto por lo que las tensiones entre las élites tradicionales (de filiación política conservadora o liberal) y las fuerzas emergentes pudieron gestarse, pues buscaban redefinir el orden socioeconómico.

Más aún, al llegar la década de 1930, con el cambio de gobierno de la larga hegemonía conservadora al tímido regreso de los liberales se hizo clara la debilidad del Estado para controlar los territorios y mediar en los conflictos regionales, cuestión que agravaba las tensiones locales, incentivando soluciones violentas. Así, se hizo manifiesta la incapacidad que tenía el sistema político para integrar diversas regiones bajo un mismo proyecto democrático, que sumara las filiaciones partidistas, ya fueran tradicionales o no.

En este sentido, el análisis regional permite visibilizar cómo las estructuras de dominación y exclusión se manifestaron de forma diferenciada en el territorio, reforzando la idea de que la violencia en Colombia debe entenderse no solo como una confrontación política, sino como un fenómeno profundamente enraizado en las desigualdades estructurales del orden social y territorial del país.

Un elemento central en la dinámica del conflicto es el cambio de gobierno, ya que las transiciones políticas constituyeron periodos de especial vulnerabilidad para los opositores. De ello se desprende la naturaleza excluyente y represiva de las estructuras de poder en Colombia, incompatibles con cualquier principio democrático, en las que el sistema bipartidista reforzó la hegemonía de una facción sobre otra, perpetuando ciclos de violencia en lugar de fomentar la estabilidad.

La expresión “quijotismo pendenciero” unida al recuerdo de la guerra de los mil días, sirve para ilustrar muy bien las acciones idealistas pero desorganizadas de las élites tradicionales, además, permite percibir una continuidad histórica en la violencia bipartidista. Este paralelismo sugiere que las disputas políticas se resolvieron por la fuerza y, por tanto, necesitaron algo más que un cambio de liderazgo, porque eran conflictos históricos que perpetuaron ciclos de reacciones que dificultaron la construcción de una democracia.

Por tanto, la violencia de la década de 1930 es vista como una repetición de luchas no resueltas, lo que terminó influyendo en la cultura política y en la desconfianza hacia las instituciones democráticas. La persistencia en la narrativa de la Guerra de los Mil Días sugiere

que Colombia no ha logrado sanar las heridas sociales ni establecer un pacto social real e inclusivo que aborde las causas subyacentes de los enfrentamientos, lo que implica que la violencia es, en parte, el resultado de conflictos no resueltos que se reavivan con cada cambio político significativo.

Así lo interpretó uno de los ministros conservadores de Enrique Olaya Herrera, Roberto Urdaneta Arbeláez: “La elección de Olaya Herrera mudó totalmente el horizonte”. No obstante, a pesar de todas las condiciones favorables con las que realizó su administración, se produjeron brotes de violencia en varios departamentos, y cuando se esperaba que se consolidara más que nunca la convivencia de los dos partidos y su colaboración en beneficio del país dentro de un régimen democrático y espiritualista empezó a asomar de nuevo la pasión sectaria y a renacer el odio que parecía haberse extinguido definitivamente”.

El fenómeno en sí mismo, y tal como se produjo, parecía inexplicable. En la elección del año 30 el liberalismo obtuvo un triunfo a que él mismo no había aspirado y conquistó grandes posiciones con que no contaba. El conservatismo, a su turno, entregó el poder y todos lo gajes sin resistencia alguna, en forma que no tenía precedentes en nuestra historia; no se veía, por tanto, razón para que el triunfo del año 30 exaltara el sectarismo liberal ni para que se enardecieran los ánimos en contra de su antiguo contrincante.

El partido Conservador, que hubiera podido haberse exacerbado con la pérdida del poder y con el correspondiente desplazamiento burocrático, prestó apoyo al gobierno de Olaya Herrera, con serenidad. Sin embargo, se desató la persecución de los liberales triunfantes contra los conservadores vencidos.

El gobierno hizo todos los esfuerzos para detener la sangría y las directivas liberales cooperaron en el mismo sentido; pero el hecho continuó y empezó a reabrirse el abismo entre los dos partidos, y a germinar el ánimo vengativo que habría de traer, en futuro cercano, días aciagos para la nación. Producido el primer ataque sangriento de liberales contra conservadores, el proceso violento se desarrollaría automáticamente; vendría entonces el deseo de venganza, y

quedaría urdida la cadena de la violencia, que después, sería imposible de romper”. (Urdaneta Arbelaez, 1960, págs. 24,25).

“Olaya Herrera inició su gestión formando un gobierno de coalición en el cual ambos partidos estaban representados en todos los niveles. Esta conformación suavizó la transición política. Sin embargo, después del cambio de mando iniciaron los mismos eventos que siguieron a la posesión de Olaya en muchas pequeñas poblaciones rurales”. (Bushnell, 2007, pág. 287)

La comprensión de la violencia de los primeros años del siglo XX se amplía al considerar la pasión sectaria y el odio revivido a los que aluden los autores de las fuentes; indicando que la confrontación bipartidista tenía raíces emocionales e ideológicas que superaban los acuerdos del gobierno. Además, que la identidad política se había construido en oposición al otro, en una dinámica de vencedores y vencidos, que terminó deslegitimando la posibilidad de un gobierno no en contra sino con el otro. La utilización del “triumfo” para despojar al partido contrario refleja una concepción errática de la democracia como un mecanismo de dominio que reprodujo patrones de conflicto.

Esta dinámica se evidencia en el periódico El Tiempo del 15 de abril de 1930 en un titular que reza “El liberalismo es hoy el dueño de la situación en el país, dice el general, Carlos Jaramillo Isaza”. El general Jaramillo Isaza dice que Olaya Herrera será la verdadera salvación de la república – su concepto sobre el doctor Abadía Méndez”: “De paso para el Valle del Cauca, estuvo en la ciudad el general Carlos Jaramillo Isaza, líder vasquita y parlamentario quien concedió una entrevista al Diario del Quindío. Les transcribo algunas apartes: ¿Qué actitud asumió el presidente Abadía Méndez con los jefes políticos que conferenciaron con él en el palacio?

-La misma de siempre, respondió el general, mañosa, falsaria, hipócrita, porque él es incapaz de asumir actitudes definidas, y porque, conocedor más que nadie de sus propias faltas, le teme demasiado a la opinión pública.

¿Cuál es su concepto sobre el doctor Olaya Herrera?

Yo creo francamente que él es el dueño de la situación. El doctor Alfonso López está desarrollando una política de prudencia y de tacto político, tanto enfrente del doctor Olaya como en presencia de otras corrientes políticas, en fin, de que la entrega del poder no sea obstaculizada por nadie; pero esto es una puerilidad, ya que en la conciencia nacional está la idea de que es forzoso que el gobierno entregue el mando a quien determina la decisión del pueblo. Lo que todos anhelamos es que se acabe este desgobierno a ver si al fin podemos hacer alguna cosa en beneficio de la patria” (El Tiempo, 1930, pág. 7).

Según los historiadores, la segunda ola de violencia bipartidista coincide con el contexto de cambio de gobierno el 7 de agosto de 1946, cuando los conservadores, tras la victoria electoral de Mariano Ospina Pérez, retornan a la presidencia. Este periodo se caracterizó por el recrudecimiento de la violencia política que evidenció, de nuevo, un ciclo de retaliación entre liberales y conservadores. Cuyas consecuencias marcaron profundamente las dinámicas sociales y políticas del país.

Autores como Orlando Fals Borda, Germán Guzmán Campos y Eduardo Umaña Luna denuncian la manera en que la violencia comenzó a percibirse como una parte natural del acontecer cotidiano: “¿Hay, como parece desprenderse de las informaciones de los diarios, una ola de violencia? ¿Alguien ha comprobado qué relación guardan los hechos de sangre y los actos criminales de esta época? No. Pero sin duda, un extranjero que quisiera informarse de la situación actual de Colombia, al pasar una revista sobre la prensa del país, la creería al borde de una catástrofe o en el filo de una revolución.

Los colombianos, en cambio, no nos alarmamos. ¿Por qué? ¿Nos es indiferente que cada 24 horas se registre un nuevo hecho de sangre, atribuido a luchas políticas? No. No podemos haber llegado a ese grado de insensibilidad. Algo debe ocurrir, sin embargo, para que cristianos viejos, no demos la importancia que se merece a una situación semejante. Ni los conservadores asesinados por los liberales, ni los liberales asesinados por los conservadores provocan nuestra

alarma o nuestra indignación, porque todos esos informes son recibidos con un considerable descuento inicial.

Los partidos, que coléricamente se disputan la palma del martirio, contribuyen decisivamente a que los hechos vuelvan a provocarse, a que haya impunidad, a que la criminalidad se tape con sus banderas y levante testigos para amparar a los ofensores o derivar la responsabilidad hacia las personas inocentes” (Fals y otros, 1962, pág. 28).

La advertencia sobre la aparente indiferencia de la sociedad frente a los actos de violencia alarma, pues es una actitud que revelaba la insensibilidad generalizada ante el quehacer político con violencia. Pues, mientras un observador extranjero podría haber interpretado que Colombia se encontraba al borde del colapso, los ciudadanos parecían haber interiorizado la violencia como parte del ciclo político habitual. Esa normalización, plantea la profunda crisis de la responsabilidad social y moral ya presente en aquellos años. Este fenómeno de "automatismo" en la violencia sugiere una crisis de compromiso social, donde los actos violentos eran vistos como inevitables.

Valdría la pena también indicar un aspecto estructural de gran relevancia: la impunidad. Los partidos no solo alimentaban el conflicto, sino que encubrían a los agresores y transferían la culpa a terceros inocentes, en un esfuerzo por proteger sus intereses. Esta práctica evidencia que el sistema bipartidista operaba como un dispositivo de poder cerrado, más interesado en su propia reproducción que en el bien común. En este sentido, la violencia no era simplemente una consecuencia del enfrentamiento ideológico, sino un medio funcional para consolidar el control político y asegurar la continuidad del orden partidista.

La comparación entre los años treinta y el periodo de 1946 refuerza esta tesis. En ambos contextos, la violencia fue instrumentalizada como una herramienta para afianzar el dominio político: en los años 30, mediante la persecución activa por parte del liberalismo en el poder; y en 1946, a través de la impunidad y el uso retórico de la victimización.

Este último elemento, el “martirologio” político, fue central en la estrategia discursiva de los partidos, que competían por presentarse como víctimas legítimas del conflicto. Dicha narrativa reforzaba el sectarismo, justificaba el uso de la violencia y prolongaba el enfrentamiento, dificultando así cualquier posibilidad de reconciliación.

De esta manera, lo dirá el periódico *El Tiempo* el miércoles 1 de octubre de 1947: “El conservatismo amenaza con la violencia en Norte de Santander”. En las poblaciones liberales ahora se apela a toda clase de trucos. Por medio de amenazas de todo género, el conservatismo más reaccionario estimulado por el sectarismo del gobierno seccional pretende amenazar al liberalismo para tratar de evitar su segura victoria en municipios como Pamplona, Chinácota, Arboledas y otros, donde el conservatismo pretende arrebatarse la mayoría al liberalismo por medio de la violencia. Pero en todos estos municipios el liberalismo está listo y resuelto para la defensa y para obtener la victoria que legítimamente le corresponde.

El periódico conservador “Palonegro”, que dirige el doctor Oscar Verjel Pacheco, dice con descaro que los conservadores se movilizarán sobre Pamplona para acompañar a sus copartidarios el día de las elecciones. Por su parte, el vocero liberal “Comentarios” interpreta estas amenazas y dice: como el gobernante es el directo responsable del orden público y bastaba de amenazas y de conjuras siniestras para alarmar y amedrentar al liberalismo, esperamos que el mandatario seccional declare categóricamente si va a permitir la invasión a Pamplona que anuncia con tanto optimismo el “coronel” Verjel Pacheco. Agrega, “Comentarios”, que el liberalismo está apercebido para la defensa y que no dejará abandonados en esta hora a los gallardos compatriotas de Pamplona”. (*El Tiempo*, 1947, pág. 6).

Este proceso de legitimación de la violencia a través del discurso victimista tiene profundas implicaciones para la memoria histórica. Si no se cuestionan estas narrativas, se corre el riesgo de perpetuar una visión distorsionada de los hechos, en la cual la violencia aparece como inevitable o necesaria. Por ello, la construcción de memoria, demandada por el presente ejercicio, debe asumir una postura crítica que visibilice las decisiones políticas, los actores responsables y los mecanismos de justificación que operaron dentro del conflicto.

En definitiva, la violencia de 1946 no puede entenderse como un fenómeno aislado, sino como parte de un proceso histórico que combina continuidad, adaptación y funcionalidad política. “Se extendió a lo largo de 16 años, contó con el asentimiento y apoyo oficiales y fue abundante en consecuencias: de una brutalidad escalofriante, lo cual puede apreciarse en las modalidades delictivas, en el número de víctimas y las pérdidas materiales: asesinatos, violaciones de mujeres, en presencia de sus familiares, mutilaciones, incendio de cadáveres, destrucción de cosechas.

En cuanto al número de muertos no se conoce ni se podrá conocer la cantidad exacta, porque muchos desaparecieron sin ser registrados, bien porque fueran enterradas o abandonadas en las montañas o arrojadas a los ríos o bien porque las autoridades no se preocuparon por tomar nota” (Molina, 1989, pág. 240).

Precisamente, para hacernos una idea de la magnitud de esa segunda ola de violencia, Gerardo Molina es quien se aventura a dar un ponderado de asesinatos ocurridos entre 1946 – 1958, pero “admito que debieron ser más, porque durante el largo trecho de la violencia hubo censura de prensa, se cerró el Parlamento y las autoridades no suministraban informes, todo indica que la verdad está entre 54.049 a 200.000” (Molina, 1989, pág. 243).

Como puede verse en la siguiente tabla:

Tabla 1

Estadísticas de homicidios.

| Departamento | Homicidios |
|--------------------|------------|
| Antiguo Caldas | 42.085 |
| Tolima | 29.926 |
| Antioquia | 25.278 |
| Norte de Santander | 20.209 |
| Santander | 18.812 |

| | |
|--------------|---------|
| Valle | 12.687 |
| Meta | 5.649 |
| Boyacá | 5.199 |
| Huila | 3.982 |
| Cundinamarca | 3.094 |
| <hr/> | |
| Total | 168.451 |

Nota: Los datos de las variables fueron ponderados.

Frente a este panorama, surgen preguntas cruciales para el presente, que podrán ser parte de futuras investigaciones: ¿cómo desnaturalizar la violencia política? ¿De qué forma cuestionar las narrativas partidistas que la justifican?, ¿quiénes son las víctimas?, ¿todos somos víctimas?, ¿quiénes son victimarios?, ¿todos somos victimarios? Este tipo de análisis no busca únicamente comprender el pasado, sino también fomentar una conciencia crítica que permita construir una memoria capaz de desactivar las lógicas de violencia que han marcado la historia política de Colombia; dado que, y sin dar mucho lugar a la duda, la violencia fue la impulsadora de la transformación socio- cultural que tuvo el país durante buena parte del siglo XX, y, por qué no decirlo, de lo que ha recorrido el siglo XXI.

Por último, una tercera ola de violencia se configuró alrededor del asesinato de Jorge Eliécer Gaitán el 9 de abril de 1948. Este evento marcó un hito en la historia política del país, pues detonó una reacción colectiva que manifestó, con crudeza, la fragilidad del sistema democrático en Colombia. El Bogotazo, debe comprenderse como el desbordamiento de tensiones sociales acumuladas frente a un orden político excluyente.

“Casi todos los colombianos condenaron el crimen abominable que segó la vida de Gaitán, pero nadie previó sus tremendas consecuencias. Así como en las ciudades, Gaitán contaba con un inmenso caudal de irrestricta adhesión dentro de la masa campesina.

Él abanderaba la esperanza de solución de toda una problemática secular. Su voz era el grito de la ruralía que, cuando lo supo extinguido, recordó su consigna histórica: “Si avanzo,

seguidme, si retrocedo, empujadme, si os traiciono, matadme, si muero, vengadme” (Fals y otros, 1962, pág. 37)

Días antes, de su muerte, había soportado numerosas presiones para que colaborara con el sabotaje de la Novena Conferencia Panamericana. “Todos, dijo, los rechacé rotundamente; yo no soy capaz de contribuir al descrédito de mi patria, ni tampoco quiero obstruir la tarea en la que están empeñados todos los países de nuestro hemisferio”. Y agregó: “para evitar equívocos sobre el particular, haré una declaración pública en la que se establezca claramente mi posición. Exigiré al pueblo bogotano que se abstenga de toda actitud que pueda redundar en perjuicio de las labores de la Conferencia” (El Tiempo, 1948, pág. 1).

No obstante, “Gaitán y otros no carecían de argumentos para justificar su ruptura con el régimen conservador, pero la consecuencia inevitable sería abandonar las masas liberales a merced del gobierno”. Los incidentes violentos continuaron, en tanto que Colombia se preparaba para la Conferencia Panamericana. El infierno se desató el 9 de abril cuando Gaitán fue asesinado”. (Bushnell, 2007, pág. 288)

Por tanto, presentar a Gaitán como un líder político con una profunda conexión y respaldo de la Colombia campesina y urbana de aquella época no es nada nuevo. No obstante, esto sugiere que su liderazgo y su propuesta política lograron tocar los sentimientos de sectores históricamente excluidos, convirtiéndolo en un símbolo de esperanza. Por eso el impacto de su asesinato fue tanto inmediato como devastador y se expresó en una explosión masiva de violencia urbana que reflejó el descontento social con un sistema político incapaz de canalizar institucionalmente las demandas de las mayorías.

La frase emblemática “Si avanzo, seguidme; si retrocedo, empujadme; si os traiciono, matadme; si muero, vengadme” encapsula la relación simbólica pero también emocional entre Gaitán y sus seguidores, convirtiéndose en una consigna de resistencia, pero también en un llamado a la venganza, que alimentó la espiral de violencia. Es evidente la contradicción entre el ideario democrático que Gaitán defendía, expresado en su negativa a sabotear la Conferencia Panamericana y la respuesta violenta de una sociedad frustrada por la exclusión política.

Esta paradoja revela las limitaciones del sistema bipartidista, que al tiempo que promovía formalmente la democracia, mantenía mecanismos de supresión que reprimían cualquier alternativa real de transformación social. El Bogotazo constituye un punto de quiebre que simboliza el fracaso del proyecto democrático en Colombia.

A diferencia de episodios anteriores de violencia, esta explosión social fue una manifestación directa del descontento popular frente a un sistema cerrado y elitista. Por ello, la memoria histórica colectiva ha conservado este momento como un símbolo de ruptura, no solo por su violencia, sino por su capacidad para evidenciar las falencias estructurales del orden político colombiano, carente de legitimidad representativa y con una desconexión profunda entre las élites políticas y las bases sociales.

El reto desde la memoria histórica es transformar el dolor y la frustración en procesos de reivindicación que cuestionen las narrativas de victimización y permitan avanzar hacia una comprensión más incluyente y democrática del pasado y del presente político nacional. No hay que olvidar que somos seres narrativos. Nuestras sociedades están hechas de las historias que nos contamos, pero que también dejamos que nos cuenten; por tanto, nuestra vida termina siendo acción ejercida desde la historia de la que partimos. La memoria histórica debe ayudarnos -ojalá así sea- a cuestionar los relatos que nos oprimen y a encontrar nuevos horizontes de sentido.

2. El Frente Nacional, un legado de la violencia bipartidista.

¿De qué manera el Frente Nacional representa una respuesta y un legado a la violencia bipartidista, y cómo influyó en la configuración política y social actual del país? ¿Cómo podemos articular todo lo que analizamos sobre la violencia bipartidista al Frente Nacional?

Desde 1956, en plena dictadura, el líder liberal, Alberto Lleras Camargo, y el Conservador, Laureano Gómez, pactaron en Benidorm un acuerdo con el cual los partidos tradicionales sellaron una alianza que daría origen a lo que se conoció como Frente Nacional.

Como bien lo expresa la Comisión de la Verdad de allí salió un texto conjunto en el que ambos dicen que: “Se encuentra necesario y enteramente posible crear un gobierno o una sucesión de gobiernos de coalición amplia de los dos partidos, hasta tanto que, recreadas las instituciones y afianzadas por el decidido respaldo de los ciudadanos, tengan fortaleza bastante para que la lucha cívica se ejercite sin temor a golpes de estado o la intervención de factores extraños a ella”. (Gómez Castro & Lleras Camargo, 1956).

Un año después, en Sitges, Lleras y Gómez acordaron la celebración de un plebiscito que aprobó la reforma constitucional que terminó por darle vida al Frente Nacional por el cual se repartiría el poder político entre los partidos Conservador y Liberal, para “volver a la democracia”, según quienes los suscribieron. No se puede olvidar que todo esto ocurría en medio de la violencia que persistía a pesar de los indultos que el dictador había celebrado con los alzados en armas, ni tampoco, que ese acuerdo pretendía acabar la misma dictadura que habían aprobado, esos mismos partidos, para ponerle fin al algo que ellos ya no controlaban: la violencia que no cesaba, los “Pájaros” que no se detenían para ejercerla y las autodefensas de campesinos liberales que protegían el movimiento agrario.

Esto dio lugar al célebre pacto del 20 de marzo de 1957 al cual pertenece el siguiente párrafo: “queremos decirle a la nación que, nos proponemos sepultar los antagonismos excluyentes que durante un siglo consumieron tantas energías y promesas de bienestar colectivo en la hoguera de nuestras luchas de predominio hegemónico” (Molina, 1989, pág. 304).

En este sentido el pacto configuró un singular interés en la medida en que la repartición del poder político se concibió como el mecanismo para conjurar la violencia, siempre que cada partido pudiera ocupar la presidencia y tener acceso a los cargos legislativos y judiciales inicialmente, por 12 años, que luego el Congreso prolongó a 16. No sin razón, la Comisión de la Verdad traerá a colación: “Tiempo suficiente para extinguir las pasiones y curar las heridas que la lucha por el poder y el predominio de la gente violenta dentro de nuestros partidos causaron a la generación actual” (Lleras Camargo, Alberto; Gómez, Laureano, 1957). Desde un punto de vista crítico se ha sostenido que este arreglo terminó extendiéndose por más de 30 años... hasta la

constitución de 1991, en la medida en que el Estado posterior al Frente Nacional reprodujo e incluso profundizó las mismas lógicas de exclusión existentes con anterioridad.

En diversas narrativas históricas el Frente Nacional ha sido presentado a las generaciones posteriores, como un acuerdo necesario para restablecer la democracia y pacificar el país tras un período largo de violencia interpartidista. Así lo hacía saber Alberto Lleras Camargo al Periódico el Tiempo el miércoles 5 de enero de 1966: “Por eso hoy el Frente Nacional es el Frente de la Transformación Nacional. Sólo la insignificancia intelectual de la oposición a la candidatura de Carlos Lleras puede ver algo anormal en el rebautizo del movimiento de los dos partidos que se inició hace casi diez años para derribar la dictadura de Rojas Pinilla. Su primera etapa ha sido la de restaurar las instituciones democráticas y pacificar el país. Esta segunda es emprender la transformación que Colombia requiere y ambos partidos están concordes a lograrlo en el cuatrienio que presida Lleras Restrepo”. (El Tiempo, 1966).

Pero aquí tal necesidad resulta problemática, en la medida en que cabe cuestionar si dicho acuerdo representó efectivamente la voluntad popular, o si, por el contrario, consolidó una dinámica de exclusión estructural de amplios sectores políticos y sociales funcional a los intereses de las élites partidistas tradicionales. Más que ampliar los márgenes de representación democrática, este arreglo contribuyó a reproducir prácticas políticas cerradas que, con el paso del tiempo, erosionaron la legitimidad del orden político y favorecieron formas distorsionadas del ejercicio político.

El relato dominante, enfatiza mucho en el plebiscito de 1957, donde el 96,4% de los votantes aprobó la coalición entre los partidos Liberal y Conservador (Melo, 2017, pág. 231). Dirá Alberto Lleras Camargo, en la primera declaración del presidente electo del Frente nacional, afirmarí:

“Ignoro los resultados numéricos discriminados en las votaciones y no tengo ciertamente que hacer sobre ellos cálculos para definir cualquier política futura. Lo que ha ocurrido, evidentemente, es que la nación, en su inmensa mayoría, abrumadoramente, ha declarado otra vez

su voluntad firme de que el Frente Nacional se instaure ahora en la presidencia de la República, en una nueva fórmula constitucional destinada a buscar y lograr la convivencia de los partidos colombianos” (Lleras, 1958).

Sin embargo, esta información omite preguntas clave sobre las condiciones en las que se llevó a cabo tal votación. Desde otro punto de vista, es necesario preguntarse si aquella participación electoral masiva fue un reflejo genuino de la soberanía popular o si, por el contrario, estuvo mediada por presiones políticas, falta de alternativas y un discurso de "no hay otra opción" promovido por la clase política dirigente.

Esto para decir que el Frente Nacional no solo estableció la alternancia cuatrienal entre los dos partidos tradicionales, sino que también institucionalizó un modelo de exclusión política. En la práctica significó que movimientos emergentes, la izquierda no alineada y los sectores populares, no tuvieran acceso al gobierno ni a mecanismos efectivos de participación. Así, se perpetuó un sistema clientelista que beneficiaba a las mismas élites de siempre y limitaba la representación democrática.

Vale la pena preguntarse si hubo oposición al Frente Nacional, pues apenas es mencionada superficialmente en los relatos tradicionales, pero fue mucho más amplia de lo que suele reconocerse. No solo Gilberto Álzate Avendaño y un sector del conservatismo rechazaron el pacto, sino que también lo hicieron grupos campesinos, movimientos políticos alternativos, sindicatos, movimientos estudiantiles y los primeros grupos guerrilleros que emergían por aquel entonces, quienes vieron en esta coalición un mecanismo para mantener el statu quo en detrimento de las transformaciones sociales necesarias y también un obstáculo del poder democrático que institucionalizó la proscripción de fuerzas distintas a los partidos tradicionales.

“El ex general Gustavo Rojas Pinilla atacó ayer las tesis del directorio conservador Álvaro-alzatista relacionadas con el candidato a la presidencia de la República. Explicó Rojas Pinilla en declaraciones a la radio: “nos diferenciamos del Alvaro-Alzatismo porque ellos van contra Lleras Restrepo y aceptan cualquier otro personaje del sistema, mientras que nosotros

(ANAPO) no odiamos a ninguna persona porque lo que deseamos es la desaparición del Frente Nacional” (El Tiempo, 1996, pág. 12).

La naturaleza de ese pacto revela que estuvo lejos de construir un avance democrático para un país como Colombia. Por el contrario, terminó consolidando el dominio excluyente de unos y sofocó cualquier posibilidad de pluralismo político. Aunque se argumente que el plebiscito de 1957 representó una manifestación sin precedentes de participación ciudadana, en realidad, este proceso selló una estructura de exclusión política que eliminó la competencia democrática y bloqueó el acceso al poder de fuerzas políticas alternativas.

En ese orden de ideas, Jorge Orlando Melo, habla de un tercer actor importante en todo esto y bastante satanizado en el escenario político colombiano, el Partido Comunista, para Melo el acuerdo del Frente Nacional estableció la paridad liberal-conservadora en el Congreso y las cortes, así como la conformación de gabinetes presidenciales equilibrados entre ambos partidos, con representación de sus distintas corrientes conforme a su peso parlamentario (Melo, 2017)

El plebiscito confirmó los derechos políticos de las mujeres y derogó las otras formas constitucionales de la Asamblea Nacional Constituyente, de modo que legalizó al Partido Comunista, aunque, al definir que los elegidos debían ser liberales y conservadores, le quitó la posibilidad de presentarse en su propio nombre, una incapacidad que afectaba también a otros partidos minúsculos.

“Aunque el nombre de comunista reivindicaba la doctrina Marxista, este partido mantuvo vínculos muy estrechos con los sectores radicales del liberalismo. No hay que olvidar que participaron en los movimientos huelguísticos que contribuyeron a quebrantar la estructura de los gobiernos conservadores en 1929. Ante estos hechos el partido conservador en el gobierno no tuvo otra actitud que la represión. Con una ideología autoritaria, y vencedor por las armas de forma apabullante” (Tirado Mejía, 2022, pág. 135)

Pocos se inquietaron por aquellas restricciones en un país en el que el voto liberal y conservador nunca había bajado del 98%. En consecuencia, hasta el Partido Comunista invitó a sus seguidores a votar por el plebiscito: parecía preferir un régimen civil que le permitiera organizarse y tener sus periódicos, a una dictadura que atacaba a sangre y fuego a sus bases rurales, perseguía sus organizaciones y estaba llevando a muchos militares a pensar que la única salida era la guerra abierta” (Melo, 2017).

El Frente Nacional instauró una fórmula paritaria que, bajo la apariencia de equilibrio democrático, funcionó como una estrategia de las élites liberales y conservadoras para mantener el control del aparato estatal. La alternancia presidencial y el reparto equitativo de cargos en el Congreso y las Cortes no respondieron a una apertura ideológica, sino a un pacto de élite que institucionalizó la exclusión política de actores distintos al bipartidismo. Esta repartición burocrática cerró el sistema político e impidió el desarrollo de una democracia pluralista.

Aunque el plebiscito de 1957 fue presentado como una señal de apertura democrática — por incluir el sufragio femenino y otras reformas—, su propósito central fue legitimar la continuidad del poder bipartidista. La legalización del Partido Comunista y el respaldo de este al plebiscito no significaron una inclusión real, sino un cálculo político frente a la represión estatal, con la esperanza de obtener garantías mínimas de organización y expresión. Sin embargo, el acuerdo negó el acceso efectivo a las elecciones presidenciales y legislativas a cualquier actor distinto de los partidos tradicionales.

Este cerco institucional motivó la radicalización de sectores excluidos, especialmente de la izquierda, al no encontrar vías legítimas de participación. La represión militar y la falta de representación llevaron a que ciertos grupos optaran por la vía armada, configurando una de las causas estructurales del conflicto armado colombiano. Reconocer esta exclusión no implica justificar la violencia insurgente, sino comprender su génesis dentro de un sistema político cerrado que frustró las aspiraciones democráticas de amplios sectores sociales.

Finalmente, el alto nivel de participación de aquel plebiscito de 1957 (96%) – se insiste en ello en nombre la memoria histórica que es necesario invocar- no puede tomarse como prueba de una voluntad popular genuina. La falta de competencia real y la exclusión impidieron que los ciudadanos pudieran elegir entre diferentes proyectos políticos. En este sentido, el Frente Nacional instauró un régimen que, lejos de ser una solución democrática a la violencia, fue un pacto de élites para garantizar su perpetuación en el poder, lo que terminó haciendo que la violencia fuera la misma, pero con un antifaz diferente.

Una segunda inferencia podría ser que el Frente Nacional no fue un acuerdo de reconciliación con fines democráticos, no, sino una respuesta excluyente que afianzó el bipartidismo marginando a fuerzas políticas alternativas y preparando el terreno para una nueva etapa del conflicto armado que ha marcado a Colombia hasta nuestros días. Solo una revisión crítica del pasado permitirá comprender las raíces estructurales de la exclusión política en este país y su impacto en la historia reciente. “Los partidos liberal y conservador han sido pluriclasistas desde su composición y han representado diferentes clases o facciones de clase. Esta característica les permitió sobrevivir y explica, en parte, el problema del bipartidismo en Colombia”. (Tirado Mejía, 2022, pág. 94). Como se ampliará más adelante.

El hecho de que el bipartidismo representara casi la totalidad del voto no debería llevar a naturalizar la exclusión en términos políticos. Este argumento, que sugiere que el sistema estaba legitimado por el alto porcentaje de votos liberales y conservadores, ignora las prácticas de clientelismo, coacción electoral y violencia que caracterizaron el periodo. En un contexto donde la competencia electoral estaba restringida y los sectores de oposición eran criminalizados, el Frente Nacional no podía ser visto como un acuerdo de apaciguamiento, sino como una estrategia que dejó por fuera del juego a las voces que cuestionaban sus estructuras de privilegio.

Retomando los interrogantes iniciales, resulta necesario detener el análisis para abordar uno de los problemas más persistentes de la historia política en Colombia: los movimientos guerrilleros. Estas organizaciones constituyen una de las herencias más duraderas del Frente Nacional y del contexto político que lo precedió, y continúan siendo una expresión vigente al

menos en el caso colombiano de las formas de oposición gestadas en aquel periodo. Más que realizar un recuento de su trayectoria histórica o una apología de su accionar, interesa situar el proceso sociopolítico que dio lugar a su surgimiento, con el fin de reflexionar, a partir de allí, sobre las lecciones derivadas de una prolongada secuencia de acuerdos de paz que, paradójicamente, han tendido a reproducir el conflicto armado con estos grupos, cuya existencia supera ya el medio siglo.

Jorge Orlando Melo aporta un marco interpretativo clave al señalar que el inicio del Frente Nacional estuvo marcado por un clima de euforia generalizada, en el que amplios sectores del electorado depositaron sus expectativas en la promesa de paz tras años de violencia. Como indica el autor: “el Frente Nacional comenzó en medio de una euforia general, los electores estaban ilusionados, pues iba a lograrse la paz, después de tantos años de violencia, y dieron más de 80% de los votos al candidato ganador, Alberto Lleras Camargo, quien recibió el apoyo liberal y conservador, además del Partido Comunista. Como en otros años, el gobierno prometió reformas y programas sociales para atender una población urbana que crecía aceleradamente. Las ciudades se llenaron de barrios de invasión por la migración acelerada producida por el atractivo de la vida urbana, pero a la vez, por la violencia y la pobreza rurales” (Melo, 2017, pág. 232).

Parece imposible, en nuestro medio, no mezclar la política con los estados emocionales, el Frente Nacional, en sus inicios, no escapó a ello y, sobre su final tampoco, pues de la euforia se pasó a la decepción. Ese optimismo inicial fue en gran medida un efecto de la necesidad de los ciudadanos de experimentar estabilidad tras la violencia de los años anteriores a pesar de que por aliviar el sectarismo partidista por medio del control bipartidista “los dirigentes conservadores, liberales y la Junta militar posterior a la dictadura de Gustavo Rojas Pinilla (1953-1957), combinaran elementos formales de la democracia con mecanismos propios de regímenes autoritarios” (Molano Cruz, 1995)

Desde sus inicios, esta unidad política entre ambos partidos estuvo marcada por una fuerte expectativa de transformación, traducida por promesas para atender a una población urbana en crecimiento, que, a su vez, respondía al fenómeno de la diáspora campo- ciudad, acelerada por el

deterioro del tejido social rural causado por la violencia y la pobreza. Esa esperanza se vio reflejada en el amplio respaldo electoral inicial, que empezó a tener respuestas, por parte del gobierno, en el incremento en la inversión de la vivienda popular urbana lo que revela, además, una transformación en la composición social y unos desafíos nuevos para el Estado como la provisión de vivienda y servicios básicos, como antes no había tenido que hacerlo.

No obstante, esa política de urbanización masiva terminó siendo un paliativo temporal a la crisis de desigualdad estructural, que, en muchos casos, sólo terminó modificando el paisaje urbano, con la creación de cinturones de pobreza que continuaron perpetuando la exclusión social y la precariedad, pero ya en un escenario distinto. En el imaginario histórico, el crecimiento urbano ha sido asociado con la modernización y el progreso; pero ese axioma no fue tan exacto en el caso colombiano, pues los barrios de invasión y la pobreza urbana persistente sugieren que ese proceso no fue tan ordenado ni benéfico para todos.

Este va a ser uno de los motivos por el que ese entusiasmo inicial va a irse degradando con los años y, aquel “acuerdo” político fue siendo interpretado no como el vehículo de la pacificación sino como un tritón, que desde las profundidades, trajo más bien, el mensaje del “mito de la pacificación”, pues lo que la narrativa construyó fue una visión idealizada desde aquel primer gobierno del Frente Nacional – que no va a ser igual de benévola con los posteriores- que los sectores sociales y políticos marginados no lo traen a la memoria con el mismo ímpetu que reflejaban los resultados electorales de 1958. Dado que, desde el input de Lleras Camargo, lo que hubo fue un cambio en las formas de violencia (exclusión política, represión estatal, guerrillas) que, como un mito, siguen siendo perennes hasta nuestros días.

Todo esto terminará siendo terreno fértil para que surgieran, crecieran, decayeran, murieran y dejaran su germen, por ejemplo, los movimientos guerrilleros que terminaron cohabitando y hasta en muchos casos siendo afines a las comunidades. La explicación de este fenómeno está en que, pese a las restricciones estructurales, traídas a colación en los párrafos anteriores, la “restauración” del régimen democrático habilitó un escenario político en el que comenzaron a emerger fuerzas sociales, junto con sus memorias colectivas, que venían siendo

invisibilizadas desde antes, que terminaron haciendo lo que queremos resaltar aquí, oposición al Frente Nacional.

“Si bien no llenó las expectativas que había colmado en sus inicios, el Frente Nacional logró la meta principal para la que había sido diseñado: poner fin a la violencia. El principal factor en la pacificación fue su estructura, debido a su efecto mesurado de las rivalidades políticas tradicionales que habían sido detonantes de la violencia”. (Bushnell, 2007, pág. 321)

Hay que recordar, que esas fuerzas sociales venían siendo reprimidas por las dinámicas de violencia estatal desde mucho antes, a través de la supresión sistemática de sus libertades ciudadanas, de prácticas autoritarias y de la utilización de mecanismos de censura, que por mucho tiempo silenciaron experiencias históricas diferentes a las ejercidas por el dominio ideológico de los regímenes de dominación política monopartidista (primero) y bipartidista (después) caracterizados por el manejo exclusivo del Estado.

Así, lo amplía Molano Cruz: “El gobierno de Ospina Pérez cerró el Congreso, de mayoría liberal, el 9 de noviembre de 1949. Dos años después el Congreso sesionó de nuevo, pero sin la participación de los liberales. En septiembre de 1952 fueron incendiadas, en Bogotá, las instalaciones de los dos diarios más importantes a nivel nacional, la sede del liberalismo y las casas de dos de sus líderes. En 1953 la imprenta que editaba el periódico legal del partido comunista fue asaltada, destrozada y clausurada por la policía. El 14 de septiembre de 1954 la Asamblea Nacional Constituyente declaró por fuera de la ley al comunismo” (Molano Cruz, 1995, pág. 63).

En tales circunstancias, como reflejo de un profundo desgaste social, político y simbólico, lo que se engendró fue un clima de desconfianza, escepticismo, desencanto y también expectativa a la novedad (como suelen ser las cosas entre nosotros, multifacéticas) que caracterizó los años previos y cercanos a 1958, va a ser, entonces, el escritor Fernando Charry Lara quien sintetizó esto diciendo: “La cultura del país sufrió en la mayoría de sus aspectos una paralización que apenas puede tomarse como reflejo del desastre nacional. Nadie puede ser ajeno a una sensación

de desconfianza de todos los valores, a un estado de escepticismo de todas las circunstancias y a una desilusión de todos los mitos" (Restrepo, 1989, págs. 83-84).

Para Charry Lara esta parálisis no afectó sólo a las instituciones, sino en general a la sociedad y a sus memorias compartidas, instalando en ellas una incertidumbre, que terminará siendo estructural, hacia los valores dominantes, una incredulidad frente a las narrativas oficiales y una desilusión frente a los mitos sobre los que se había fundado la legitimidad del Estado.

Como se ha señalado previamente, los movimientos guerrilleros surgieron como una de las principales formas de antagonismo frente al proyecto del Frente Nacional, constituyéndose en una expresión persistente de la oposición política excluida por dicho arreglo institucional. Sin pretender realizar un recuento exhaustivo de su trayectoria histórica, resulta pertinente destacar que estas organizaciones ponen de manifiesto la dificultad estructural que ha enfrentado Colombia para impedir la reaparición cíclica de la violencia política.

En el marco de una reflexión sobre el valor de la memoria histórica como herramienta para la comprensión crítica del pasado y la formación democrática en el presente, resulta pertinente traer a colación una inscripción conmemorativa ubicada en un monolito frente al aeropuerto de Palonegro, en el municipio de Lebrija, Santander.

Este monumento evoca la batalla de Palonegro, episodio decisivo de la guerra de los Mil Días (1899-1902), que fue instalado en 1963, un año antes del surgimiento del ELN y las FARC, lo que refuerza su valor simbólico como antecedente histórico de las continuidades de la violencia política en Colombia: "Sobre el campo de batalla de nuestra última guerra fratricida se erige este monumento como un voto perenne por la definitiva consolidación de la paz entre los integrantes de la gran familia colombiana". Que bien podría servir para traer al presente a Bojayá, el Aro, la Chinita, Mapiripán, Caloto...El Catatumbo...

Esa inscripción representa un esfuerzo que intenta establecer un relato reconciliador y pacificador desde el Estado enmarcando el conflicto como un episodio superado. No obstante, la

persistencia de la violencia a lo largo del siglo XX y XXI revela una desconexión con las memorias sociales y las experiencias históricas que han vivido repetidos ciclos de violencia política. “Porque se han lanzado amenazas contra la paz. Porque pocas veces en la historia patria, como en los últimos tiempos, ha sido tan inconado el odio entre hermanos, tan feroces las pasiones, tan inhumana la persecución” (El Clarin, 1949).

Dicho de otra forma, la afirmación grabada en el monumento bien podría ser leída como un intento estatal por clausurar definitivamente el conflicto armado, donde el pasado es representado para reforzar una idea de unidad nacional que termina siendo, desafortunadamente, ficticia, porque se volvió una estrategia de instrumentalización política de los conflictos o una manera de ocultar sus causas estructurales que a la hora de las sumas y las restas vienen a ser las mismas en 1899 que durante los años del Frente Nacional e incluso hasta nuestros días, a saber, lucha por el poder, exclusión, polarización política, desigualdad...

Así como hoy, a la paz de la Guerra de los Mil Días le siguió el asesinato de uno de sus firmantes, Rafael Uribe Uribe. Así como hoy, a la violencia liberal- conservadora, conjurada hasta donde se pudo por la dictadura de Gustavo Rojas Pinilla, le siguieron pequeños saldos en armas de bandoleros y campesinos de los que surgieron guerrillas comunistas en los años 1960, llamados en nuestro tiempo, “disidencias”; comparación que nos permite hablar de un fenómeno escandalosamente repetitivo y concluir que Colombia vive ciclos de violencia armada que por alguna razón no se cierran realmente, sino que se transforman y se reciclan.

Los grupos armados ilegales no desaparecen, sino que dejan “semillas” que originan nuevos grupos, por tanto, es más seguro constatar la violencia como algo estable que ciclos de auténtica paz, pues el conflicto termina adaptándose al contexto político o económico conservando su función de control territorial y social.

Esta lectura de la violencia en Colombia permite establecer un diálogo con la propuesta teórica de Eric Hobsbawm sobre el “siglo corto” y del “siglo largo” en la que los siglos no se

conciben como periodos cronológicos cerrados, sino como eras definidas por dinámicas sociales profundas (Hobsbawm, 2009, págs. 10-22).

Desde esta perspectiva, la violencia colombiana puede interpretarse no como una sucesión de episodios aislados, sino como un continuo histórico que atraviesa los siglos XIX, XX y XXI configurando una temporalidad prolongada en la que el cierre de una guerra contiene, con frecuencia, los elementos de la siguiente.

En este sentido la violencia política no se presenta como una secuencia lineal de acontecimientos sino como una estructura de larga duración en la que el terror ha cumplido una función política persistente adaptándose a los cambios de época, actores y contextos. Esta característica encuentra un correlato en la reflexión de Hobsbawm quien advierte que, en el siglo XX, - concebido como un “siglo corto”- las guerras tendieron a librarse cada vez más contra la infraestructura, la economía de los Estados y, de manera creciente, contra la población civil (Hobsbawm, 2009, pág. 23).

En definitiva, los antiguos y recientes discursos sobre desmovilización, llámese guerrillera o de cualquier otra índole, se presentaron como el cierre de un ciclo de violencia, cuando en realidad lo que se produjo fue una mutación estructural del conflicto. La paz que se anunció sea después de la Guerra de los Mil Días, los indultos a campesinos comunistas, la dejación de armas del M-19 en los años 1980 y todos los demás ejemplos, no terminaron siendo más que una nueva invención estatal que ocultó las continuidades profundas y soterradas del conflicto armado, como bien lo podemos constatar en la persistencia de actores armados ilegales bajo nuevas formas. Es necesario desmontar esas construcciones oficiales y comprender la violencia como un fenómeno histórico de larga duración, en sentido hobsbawmiano, que desafía las cronologías, cálculos institucionales y las narrativas de éxito político.

En este punto resulta pertinente recuperar una advertencia formulada por Hobsbawm hacia finales del siglo XX, particularmente relevante para reflexionar sobre contextos marcados por la persistencia de la violencia y la fragilidad de los referentes históricos. El autor señala: “En

las postrimerías de esta centuria ha sido posible, por primera vez, vislumbrar cómo puede ser un mundo en el que el pasado ha perdido su función, incluido el pasado en el presente, en el que los viejos mapas que guiaban a los seres humanos, individual y colectivamente, por el camino de la vida, ya no reproducen el paisaje en el que nos desplazamos y el océano por el que navegamos. Un mundo en el que no sólo no sabemos a dónde nos dirigimos, sino tampoco, a dónde deberíamos dirigirnos” (Hobsbawm, 2009, pág. 26).

Esta reflexión adquiere especial relevancia para el caso colombiano donde la dificultad para elaborar críticamente el pasado ha incidido en la reiteración de ciclos de violencia política que son tan evidentes ahora.

3 Entre tinta y disidencia: la prensa como un espacio de oposición al consenso bipartidista del Frente Nacional.

Esta última parte del trabajo se articula en torno a una pregunta central para la teoría democrática: ¿puede considerarse la oposición política como una característica constitutiva de la democracia? A lo largo de este análisis, el problema de la oposición ha atravesado de manera constante la reflexión sobre el Frente Nacional y sus efectos sobre la vida política de Colombia, lo que hace necesario abordarlo de forma explícita y sistemática.

Por ello, se examina inicialmente el lugar que ocupó la oposición durante el Frente Nacional, a fin de identificar las condiciones bajo las cuales fue restringida o neutralizada. Posteriormente, el análisis dialoga con los aportes teóricos de Robert Dahl y Adam Przeworski, con el propósito de comprender las transformaciones de la oposición política en el contexto colombiano y su evolución hasta el presente. Finalmente, se propone una reflexión sobre el tipo de democracia que se ha configurado en el país y sobre la naturaleza de su oposición, interrogando hasta qué punto esta ha estado históricamente desvinculada – o no- del conflicto político.

3.1 La oposición durante el Frente Nacional:

3.1.1. Oposición desde adentro:

Según Molano Cruz: “Cualquiera que haya sido el contenido ideológico del régimen de dominación política, una de sus características ha sido el manejo exclusivo del Estado por parte de una o de ambas colectividades tradicionales. Sin embargo, tanto las hegemonías monopartidistas como las diferentes coaliciones bipartidistas siempre encontraron posiciones críticas y resistencias en el interior del propio bipartidismo.

La explicación de este fenómeno está en la composición policlasista de los partidos liberal y conservador que, además de las variaciones en los intereses que representaban según las diferentes regiones, los inducía a un permanente faccionalismo”. (Molano Cruz, 1995, pág. 63)

Es posible señalar que en el interés por la oposición durante el Frente Nacional estos gobiernos no sólo enfrentaron posiciones externas provenientes de movimientos sociales o estudiantiles, expresiones armadas o partidos alternativos, sino también resistencias internas de las que no se habla mucho. Como lo afirma Molano Cruz, “tanto las hegemonías monopartidistas como las diferentes coaliciones bipartidistas siempre encontraron posiciones críticas y resistencias en el interior del propio bipartidismo”.

La razón por la que se presentaban no era necesariamente por deslealtad, sino porque sencillamente el derecho a la oposición no estaba – ni parece estar- concebido. Y tuvieron su origen en la composición policlasista de los partidos Conservador y Liberal, cuya heterogeneidad social y regional favoreció el surgimiento de facciones con intereses diversos, y en ocasiones contradictorios.

Esta diversidad interna promovió una lógica de faccionalismo permanente que dio lugar a disidencias que, aunque formalmente inscritas en los marcos legales de sus respectivos partidos, actuaron como voces críticas del régimen gobernante. Ello puso en evidencia que la estabilidad

aparente del Frente Nacional se sostuvo sobre un andamiaje más frágil y conflictivo de lo que su diseño institucional sugería. Esta dinámica resulta consistente con el planteamiento de Adam Przeworski, quien señala que, incluso en la mayoría de las democracias donde se garantizan el derecho de asociación y la expresión de posturas divergentes, la oposición organizada suele ser percibida por los gobiernos como intrínsecamente subversiva e ilegítima (Przeworski, 2010).

Przeworski señala una tensión fundamental en la democracia contemporánea, mientras por un lado se consagran derechos, por otro, en la práctica, pueden ser restringidos o estigmatizados por el propio aparato estatal, lo cual revela una ambivalencia en el funcionamiento de los regímenes democráticos de la que no se escapó el Frente Nacional.

El planteamiento de Przeworski permite problematizar los límites del pluralismo político en sistemas que, aun autodefiniéndose como democráticos, restringen de facto el ejercicio de la oposición. En estos contextos el reconocimiento formal de la disidencia no necesariamente se traduce a un acceso equitativo a los espacios de deliberación pública ni a los recursos del poder. El Frente Nacional constituye un caso ilustrativo de esta dinámica:

Aunque se estructuró como un acuerdo de alternancia orientado a estabilizar el sistema político tras décadas de violencia bipartidista, su diseño institucional excluyó sistemáticamente a las fuerzas políticas ajenas al duopolio liberal- conservador. El resultado fue una democracia formalmente vigente, pero cerrada y autorreferencial, que normalizó la exclusión política en nombre de la estabilidad reproduciendo así el patrón identificado por Przeworski según el cual los gobiernos tienden a concebir a la oposición no como una expresión legítima de la pluralidad democrática, sino como una fuerte potencial de desorden o subversión lógica que sólo comenzó a ser cuestionada de manera más explícita en el marco constitucional posterior a 1991.

3.1.2. Oposición desde afuera

Desde una perspectiva teórica más amplia sobre el funcionamiento de la oposición en sistemas democráticos, el planteamiento de Robert Dahl resulta útil para analizar las dinámicas de exclusión política observadas durante el Frente Nacional. En *political oppositions in Western democracies* (1966), Dahl formula un axioma según el cual “un grupo de gobernantes usará los poderes coercitivos del gobierno para negar a los oponentes la oportunidad de oponerse en cada momento donde el grupo gobernante espere que la coerción tenga un claro chance de éxito y las ganancias de la negativa excedan los costos” (Cordourier Real, 2015).

Este planteamiento permite comprender la exclusión o represión de la oposición no como una anomalía excepcional, sino como una conducta estratégica que los actores en el poder adoptan cuando evalúan que resulta políticamente rentable. En este sentido, la restricción del pluralismo no responde necesariamente a impulsos autoritarios, sino a una lógica instrumental del poder que opera incluso en regímenes formalmente democráticos.

Bajo esta óptica, el tratamiento de la oposición durante el Frente Nacional puede interpretarse como el resultado de una decisión estratégica orientada a preservar la hegemonía del pacto bipartidista. La limitación deliberada del acceso al poder de actores ajenos al liberalismo y al conservatismo, así como la marginalización de facciones críticas dentro de los propios partidos tradicionales, respondió a un cálculo político que priorizó la estabilidad del acuerdo por encima de la apertura democrática, reproduciendo el tipo de dinámica que Dahl identifica en contextos donde la exclusión resulta viable y funcional para quienes gobiernan.

De ahí, el uso de mecanismos legales y simbólicos para limitar el sistema político como la alternancia, la asignación paritaria de cargos y la exclusión de terceras fuerzas, se alinea con el planteamiento de Dahl: El Frente Nacional operó bajo la lógica de minimizar los riesgos que pudieran afectar la alternancia, maximizando la estabilidad del acuerdo incluso a costa de deslegitimar o hasta criminalizar la oposición, como llegó a hacerse, por ejemplo, con Guillermo León Valencia (1962-1966).

En este sentido, el planteamiento de Dahl permite comprender cómo la democracia puede ser instrumentalizada por los actores dominantes para contener la pluralidad política, mediante decisiones estratégicas orientadas a preservar el poder cuando los costos de la exclusión son bajos y sus beneficios son percibidos como altos.

En contextos donde el acceso institucional al poder fue deliberadamente restringido, la oposición se vio forzada a recurrir a mecanismos alternativos de intervención política. Uno de los más relevantes durante el Frente Nacional fue la prensa, que operó como un espacio privilegiado para la expresión crítica frente a los límites impuestos por los gobiernos del pacto bipartidista. En este sentido, Molano Cruz señala que “La importancia social e histórica de las publicaciones que expresaban sus opiniones críticas a las tesis políticas del Frente Nacional emanaba del hecho de que para este pacto entre liberales y conservadores resultó decisivo el apoyo de los grandes periódicos de la época”.

La centralidad de la prensa en la consolidación del proyecto frente nacionalista no se limitó al derrocamiento del régimen militar. Antes y después de ese episodio, los editoriales, las noticias y los titulares de los principales periódicos colombianos, tanto nacionales como regionales, se constituyeron en una pieza clave para la legitimación y reproducción del régimen, evidenciando el papel estructural que desempeñaron los medios en la configuración del consenso político del Frente Nacional.

En este marco, la prensa no adscrita al proyecto del Frente Nacional puede comprenderse como un espacio de oposición política que articuló discursos distintos a los oficiales y produjo una lectura alternativa de la realidad nacional. Más que un simple canal informativo, estas publicaciones configuraron un campo ideológico desde el cual se cuestionó la hegemonía bipartidista y se disputó el sentido legítimo del orden político, en un contexto en el que las vías institucionales de oposición se encontraban severamente restringidas (Molano Cruz, 1995, págs. 63,64).

La creación de un espacio diferente fue la respuesta a otro escenario donde el Frente Nacional fue hegemónico: el mediático. Ese lugar tenía por objeto desafiar la narrativa oficial impuesta por los grandes periódicos del país aliados al régimen. Esta prensa alternativa no sólo expresó disidencia, sino que reveló, una vez más, el carácter excluyente del pacto frente nacionalista sostenido por una maquinaria comunicativa que legitimaba el cierre del sistema. La prensa crítica funcionó como vehículo de expresión política, resistencia simbólica y, sobre todo, de recuperación de ámbitos democráticos no reconocidos por el gobierno. Caben aquí los siguientes ejemplos:

a) “Diario de Colombia” (desde 1951): Los primeros en manifestarse en contra del Frente Nacional fueron algunos conservadores liderados por Gilberto Alzate Avendaño, quien, tras la caída de la dictadura, consolida este medio de expresión de los que rechazan el pacto frente nacionalista. A diferencia de otros diarios, como el Siglo y la República que apoyaban los acuerdos bipartidistas. Diario Colombia, se convirtió en una tribuna de denuncia y crítica hacia lo que consideraban una alianza antidemocrática entre liberales y conservadores.

Es en este contexto donde los sectores disidentes del conservatismo fundan el MUR (Movimiento de Unión y Reconquista) en 1958 con el objetivo de participar en el escenario electoral. Su campaña, sin embargo, obtuvo escasos resultados con un “4,7% de un total de 4.397.090 posibles sufragantes, votó negativamente en la consulta plebiscitaria” (Molano Cruz, 1995, pág. 66).

El MUR no logró trascender el núcleo conservador tradicional ni articular un proyecto político alternativo, pero sí evidenció una fractura interna en el conservatismo y una resistencia persistente, aunque muy limitada, contra el Frente Nacional.

b) Al interior el Partido Liberal la oposición al Frente Nacional se articuló desde sectores juveniles e intelectuales que encontraron en el semanario La Calle, fundado en 1957, liderado por Alfonso López Michelsen, un espacio para expresar sus desacuerdos con el orden bipartidista.

Esta publicación fue otra alternativa que surgió ante el silencio impuesto por los grandes diarios liberales El Tiempo y El Espectador que se alinearon con los postulados del Frente Nacional.

“El semanario La Calle fue el instrumento que permitió a los jóvenes liberales, que habían sido influenciados por eminentes políticos durante su educación universitaria, manifestar sus opiniones políticas en torno al Frente Nacional, ya que los otros dos grandes periódicos liberales, El Tiempo y El Espectador, no permitían la publicación de comentarios adversos al proyecto político con el que se encontraban comprometidos” (Molano Cruz, 1995, pág. 69).

Uno de los momentos fundacionales de esta oposición fue la divulgación de la Carta de México donde López Michelsen advirtió sobre la fragilidad de la alternancia presidencial por ser un sistema dominado por la herencia sectaria de Laureano Gómez. La ruptura con el Partido Liberal se formalizó en 1959 cuando los jóvenes liberales participaron en la convención liberal con el objetivo de denunciar el carácter excluyente del régimen de paridad burocrática que traía el Frente Nacional.

Por eso, institucionalizaron su proyecto político mediante la creación del Movimiento de Recuperación Nacional (MRN), que posteriormente evolucionaría en el Movimiento Revolucionario Liberal (MRL) integrado por corrientes de izquierda dentro del liberalismo tradicional.

Este proceso de oposición interna representa una de las posturas más importantes dentro de la disidencia política al interior del Partido Liberal. Y refleja cómo dentro de los partidos que firmaron el pacto hubo fracturas ideológicas profundas que pueden aún ser más exploradas por la memoria histórica. El MRL encarnó una lucha por democratizar la representación política, buscando recuperar el rol activo de sectores excluidos también desde los medios de comunicación dominantes. Aunque así no fuera percibido por los gobiernos frentenacionalistas:

“Cualquiera que sea el resultado de este primer contacto formal entre el director del Liberalismo y el MRL, lo cierto es que el partido avanza con firmeza en el camino de la deseable

unidad orgánica. Como lo anotara el doctor Lleras Restrepo, y como está claro hace mucho tiempo, las divergencias en el campo liberal no son propiamente ideológicas y radican, más que todo, en cuestiones de táctica mudables, en la apreciación de ciertos fenómenos políticos que no constituyen dogmas ni posiciones doctrinarias”. (El Diario, 1963, pág. 4).

Desde el enfoque teórico de Robert Dahl, la oposición política puede ser entendida como un rol temporal que un actor político asume frente a otro que ejerce el gobierno, con el propósito de impedir o dificultar la realización de sus objetivos. Esta concepción sistematizada por Cordourier Real, subraya que la oposición no responde a criterios objetivos predeterminados, sino que está mediada por intereses, percepciones y creencias de los actores involucrados. En este marco, se distingue entre una oposición pasiva, caracterizada por la ausencia de acciones deliberadas para bloquear las decisiones del grupo gobernante, y una oposición activa, que implica la adopción consciente de cursos de acción orientados a obstaculizar sus propósitos (Cordourier Real, 2015).

Aplicada al contexto del Frente Nacional, esta tipología permite comprender que buena parte de las expresiones opositoras no pudieron canalizarse por vías institucionales formales, dadas las restricciones impuestas por el pacto bipartidista. En este escenario, la prensa crítica al régimen operó como una forma de oposición activa, en tanto asumió un rol deliberado de cuestionamiento, denuncia y disputa del discurso oficial. Aunque limitada por controles institucionales y por la hegemonía mediática de los grandes periódicos aliados al régimen, esta oposición mediática logró incidir en el debate público y evidenciar las fisuras internas del orden frente nacionalista.

Desde la tipología propuesta por Dahl, es posible identificar diversas expresiones de oposición activa al Frente Nacional que se articularon, de manera significativa, a través de la prensa. Un primer caso lo constituye el Movimiento de Unión y Renovación (MUR), respaldado por el *Diario de Colombia*, que desde su crítica al plebiscito de 1957 y su posterior participación electoral sin el apoyo de los medios de mayor circulación, buscó obstaculizar la consolidación del bipartidismo concentrado. A través de sus publicaciones, el MUR denunció el carácter elitista del

pacto y expresó las tensiones internas existentes dentro del propio conservatismo frente al bloque dominante del Frente Nacional. Si bien su impacto electoral fue limitado, su acción evidenció la presencia de disidencias activas al interior del régimen.

De manera paralela, desde el Partido Liberal emergió otra forma de oposición activa representada por jóvenes vinculados al semanario *La Calle* y, posteriormente, por el Movimiento Revolucionario Liberal (MRL). A diferencia del MUR, este grupo articuló una crítica más estructural y cohesionada al Frente Nacional, cuestionando su carácter antidemocrático y reclamando una apertura efectiva del sistema político. Aunque esta oposición logró mayor densidad ideológica y capacidad de intervención en el debate público, también se vio constreñida por la hegemonía mediática de los grandes periódicos alineados con los gobiernos frentenacionalistas, lo que limitó su alcance y capacidad de incidencia institucional.

Ambas formas de oposición, aunque distintas en su naturaleza y eficacia política, comparten el común denominador de ser formas deliberadas de resistencia, dentro de un sistema que, si bien se presentó como solución al conflicto bipartidista, generó silenciamientos. Estas oposiciones no pueden entenderse, como lo sugiere Dahl, como simples resistencias objetivas, sino como el resultado de visiones del país, disputas por la legitimidad del poder y conflictos de intereses que alejaron a la sociedad de aquel momento, y con seguridad a las generaciones posteriores, de la oportunidad de comprender y ejercer la democracia.

Desde la lente de la historia crítica, el estudio de la oposición es clave para reconstruir las memorias de los sectores marginados por el Frente Nacional. Lejos de ser actores de menor cuantía, ellos encarnaron las voces disonantes, que, aunque no lograron desarticular el pacto que se hizo en 1957, sí marcaron el camino para que las luchas posteriores pudieran defender la democratización política, la ampliación de la representación y la crítica a los partidos excluyentes que vemos defender sus intereses hoy en día en el Congreso, los Concejos y las Asambleas Departamentales.

A la luz de lo expuesto, estas expresiones de oposición activa, aunque relevantes para comprender las fisuras internas del Frente Nacional, no lograron transformar sustancialmente el régimen ni alterar su arquitectura. Su impacto se vio limitado por la combinación de un diseño institucional que clausuró la competencia política, una hegemonía mediática favorable al pacto bipartidista y una estructura de incentivos que desalentó cualquier apertura efectiva del sistema. En este sentido, la oposición mediática cumplió una función crítica y simbólica, pero careció de capacidad estructural para traducir sus cuestionamientos en cambios políticos duraderos. El resultado fue la coexistencia de una estabilidad formal del régimen con una persistente exclusión política, condición que, lejos de resolver el conflicto, contribuyó a su reconfiguración en formas cada vez más radicales y prolongadas.

9 Conclusiones

La existencia y las condiciones de la oposición política constituyen un indicador fundamental de la calidad democrática de un régimen. En este sentido, el carácter estratégico, más que ideológico, del Frente Nacional, se evidencia en que su objetivo primordial fue desactivar el conflicto entre las élites partidistas y evitar un colapso peor del orden político existente, antes que transformar de manera estructural las causas sociales y políticas que habían dado origen a la violencia.

El pacto bipartidista operó, así como una respuesta funcional al temor compartido por las élites frente al ascenso de los sectores populares organizados, al impacto político del Bogotazo y a las dinámicas propias de la Guerra Fría. Lejos de resolver las tensiones sociales o ampliar la democracia, el Frente Nacional clausuró el sistema representativo frente a cualquier forma de pluralismo político efectivo.

Presentado como un momento de reconciliación nacional, el Frente Nacional ocultó una exclusión profunda: la de amplios sectores sociales, tanto rurales como urbanos, que quedaron sin representación política legítima. En este sentido, puede ser interpretado como la institucionalización de una democracia restringida, en la que la alternancia entre partidos tradicionales encubrió la ausencia de opciones reales para la ciudadanía, consolidándose como un acuerdo de élites orientado a la preservación de sus intereses.

Analizado desde esta perspectiva crítica, el legado del Frente Nacional contribuyó a la profundización del conflicto armado al cerrar las vías democráticas de expresión y organización política para múltiples sectores marginados. Su lógica de contención, más que de apertura, configuró un entorno poco propicio para la resolución pacífica de los conflictos y sentó las bases para nuevas formas de violencia y radicalización que se manifestarían con mayor intensidad en las décadas posteriores.

Referencias

- Bushnell, D. (2007). Colombia una nación a pesar de si misma. En D. Bushnell, *Colombia una nación a pesar de si misma*. (pág. 350). Bogotá: Ariel.
- Comisión de la verdad. (01 de 08 de 2022). *La violencia como política*. (D. S. Antolínez, Ed.)
Obtenido de Hay futuro hay verdad:
https://www.comisiondelaverdad.co/sites/default/files/descargables/2022-08/CEV_NARRATIVA%20HISTORICA_DIGITAL_2022.pdf
- Courdourier Real, C. R. (1 de 12 de 2015). Participación ciudadana e instituciones: un análisis desde la teoría democrática de Robert A. Dahl. estudios sociológicos. *Scielo*, 33(99). Obtenido de Scielo México: http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2448-64422015000300579&lng=es&tlng=es.
- El Clarin. (01 de 09 de 1949). Un clamor unanime a través de los campos y ciudades que reclama Concordia. *El Clarin*.
- El Diario. (21 de 02 de 1963). Hacia la unión liberal. *El Diario*, pág. 4.
- El Diario. (4 de 02 de 1963). Testimonio de un guerrillero ¿Cómo econtró el monseñor Guzmán a "Chispas". *El Diario*, pág. 3.
- El Tiempo. (15 de 04 de 1930). El liberalismo es hoy el dueño de la situación en el país, dice el general, Carlos Jaramillo Isaza. *El tiempo*, pág. 7. Recuperado el 20 de 05 de 2025, de <https://bit.ly/4sgS2mI>
- El Tiempo. (01 de 10 de 1947). El conservatismo amenaza con la violencia en el norte de Santander. *El Tiempo*, pág. 6. Obtenido de <https://bit.ly/4aUyzB9>
- El Tiempo. (24 de 03 de 1948). El comunismo está planeando el desorden para la conferencia. *El Tiempo*. Obtenido de <https://news.google.com/newspapers?nid=N2osnxbUuuUC&dat=19480324&printsec=frontpage&hl=es>
- El Tiempo. (05 de 01 de 1966). Por eso hoy el frente nacional es el frentte de la Transformación Nacional. *El Tiempo*. Obtenido de <https://bit.ly/3ZYGMzI>
- El Tiempo. (05 de 01 de 1996). Rojas amenaza al Lauro-Alzatismo. *El Tiempo*, pág. 12. Obtenido de

<https://news.google.com/newspapers?nid=N2osnxbUuuUC&dat=19660105&printsec=frontpage&hl=es>

- Fals, O. B., Guzmán, G. C., & Umaña, E. L. (1962). La violencia en Colombia, estudio de un proceso social. En *La violencia en Colombia, estudio de un proceso social* (Vol. 1, pág. 28). Tercer Mundo.
- Gilhodés, P. (1988). Las luchas agrarias en Colombia. En P. Gilhodés, *Las luchas agrarias en Colombia* (pág. 35). Bogotá: El Tigre de Papel. Obtenido de <https://surl.li/rgakcq>.
- Gómez Castro, L., & Lleras Camargo, A. (24 de 07 de 1956). *Comisión de la verdad*. Obtenido de Comisión de la verdad: <https://www.comisiondelaverdad.co/declaracion-de-benidorm>
- Hobsbawm, E. (2009). Historia, siglo XX 1914-1991. En E. Hobsbawm, *Historia, siglo XX 1914-1991* (págs. 10-22). Crítica Barcelona. Obtenido de <https://archive.org/details/eric-hobsbawm-historia-del-siglo-xx/page/n1/mode/1up>
- Hobsbawm, E. (1983). Rebeldes primitivos, estudios sobre las formas arcaicas de los movimientos sociales. En E. Hobsbawm, *Rebeldes primitivos, estudios sobre las formas arcaicas de los movimientos sociales*. (pág. 27). Barcelona: Ariel. Obtenido de <https://latinoamericanos.wordpress.com/wp-content/uploads/2008/10/eric-hobsbawm-rebeldes-primitivos.pdf>
- Lleras Camargo, Alberto; Gómez, Laureano. (20 de 06 de 1957). *Hay futuro si hay verdad*. Obtenido de Comisión de la verdad: <https://www.comisiondelaverdad.co/frente-nacional>
- Lleras, A. C. (1958). El primer gobierno del frente nacional. En A. Lleras Camargo, *Por qué y cómo se forjó el frente nacional* (pág. 200). Bogotá: Imprenta nacional.
- Melo, J. O. (1 de 10 de 2017). Historia mínima de Colombia. En J. O. Melo. Turner. Recuperado el 3 de 05 de 2025, de Historia mínima de Colombia: <https://bit.ly/4rfJQmk>
- Melo, J. O. (1 de 10 de 2017). *Internet Archive*. (Turner, Ed.) Recuperado el 3 de 05 de 2025, de Historia Mínima de Colombia: <https://archive.org/details/jorge-orlando-melo-historia-minima-de-colombia-el-colegio-de-mexico-ac-2017/page/n1/mode/1up>
- Molano Cruz, G. (1995). La acción política bajo el frente nacional. *Revista Colombiana de Sociología*, 2(2), 61. Obtenido de <https://revistas.unal.edu.co/index.php/recs/article/view/8680>

- Molina, G. (1989). *Las ideas liberales en Colombia de 1935 al Frente Nacional* (Vol. III). Bogotá: Tercer mundo. <https://doi.org/9586010848>
- Pizarro Gómez, L. E. (01 de 05 de 1989). Los orígenes del movimiento armado comunista en Colombia. *Portal de revistas Universidad Nacional de Colombia*(7), 7-8. Obtenido de <https://revistas.unal.edu.co/index.php/anpol/article/view/74211>
- Przeworski, A. (2010). Qué esperar de la democracia. Límites y posibilidades del autogobierno. En A. Przeworski, *Qué esperar de la democracia. Límites y posibilidades del autogobierno* (pág. 183). Siglo XXI.
- Restrepo, L. A. (1989). Literatura y pensamiento. En R. L. Antonio, *Nueva Historia de Colombia* (págs. 83-84). Planeta.
- Tirado Mejía, A. (2022). *Una historia política de Colombia*. Penguin Random House grupo editorial Colombia. <https://doi.org/9789585132665>
- Urdaneta Arbelaez, R. (1960). *El materialismo contra la dignidad del hombre. Su impacto en la vida Colombiana*. (Vol. 1). Bogotá: Lucrós. Obtenido de <https://tinyurl.com/yd6xx632>